

NO ES PAÍS PARA VIEJOS

No, no se trata de hacer ahora un comentario sobre la excelente novela del premio Pulitzer Cormac McCarthy. Tampoco de una crítica de la controvertida película que, basada en ese texto, realizaron los hermanos Cohen. Este artículo pretende hacer una reflexión sobre la triste realidad de una parte importante de los mayores en España.

En estos momentos cerca de ocho millones de españoles superan los 65 años de edad, previéndose, según la ONU, que para el 2050, junto con Japón, seremos el país más anciano del mundo. Alrededor del treinta por ciento del total sufre algún tipo de discapacidad. Los octogenarios, casi dos millones, los especialmente afectados, son el segmento que más ha aumentado en el último decenio: un 53% frente al 9,9% del crecimiento total de la población española. Un tercio de los ancianos, según la fundación Uniate, llega con dificultades a fin de mes, un 16% vive una situación de pobreza y uno de cada cuatro malvive con cantidades que oscilan entre los 250 y los 450 euros al mes.

Dice Simone de Beauvoir que “la vejez no es un hecho estadístico: es la conclusión y la prolongación de un proceso”. Pues bien, en los últimos años, fruto del modelo de sociedad en el que estamos inmersos, el concepto de viejo queda ligado, con pavor, a la soledad, la enfermedad y el estorbo. Nuestra civilización basa sus cimientos en el trabajo, el rendimiento y el consumo. El ser improductivo y tener, en general, pocas posibilidades para el consumo, convierte muchas veces a los mayores en seres marginados.

En la actualidad casi tres de cada diez mujeres se encuentran en situación de dependencia y uno de cada cinco hombres. Las personas de 75 años y más presentan unas tasas de dependencia que duplican las de la población entre 65 y 74 años. Igual y desgraciadamente son las capas más desfavorecidas las más afectadas, de forma que los que han sufrido una más pobre educación presentan los peores indicadores de salud, alcanzando una cifra de dependencia de uno de cada dos mayores analfabetos.

España supera en longevidad la media europea pero ocupa el penúltimo lugar, por delante de Irlanda, en cuanto al gasto social en relación con el PIB. En estos momentos es la familia la que cubre estos déficits, generándose en cadena una gravísima problemática social. El 80% de los cuidados a familiares de la tercera edad corre a cargo de mujeres y en el propio hogar. Cientos de miles de mujeres españolas entre los cuarenta y cincuenta años compatibilizan su familia y su trabajo con la atención a sus mayores. Muchas de ellas sacrifican su profesión y desarrollo personal para cuidarlos. El trabajo sin remuneración, que realizan las mujeres cuidando a sus mayores, supone un 60% del PIB de este país.

Los cambios que se han producido en España en los modelos de familia, además de la incorporación de la mujer al mundo laboral, han conducido a un déficit considerable de personas y recursos para atender a los mayores. Sin

embargo, los servicios públicos no han cubierto este vacío, produciendo una importante cifra de mayores sin atención y abocados a la soledad, el abandono y la mala atención. No es casualidad así que un 60% de los ancianos consume fármacos contra la depresión.

Hoy día la edad promedio de las personas, sobre todo mujeres, que atienden a sus mayores tiene es de 53 años y un 20% de ellas supera los 65 años. Al tiempo, muchas, en un porcentaje tan alto que llega a alcanzar el 80%, necesitan en algún momento, tratamiento psiquiátrico. La mayoría de nuestros hospitales no disponen de unidades geriátricas; el servicio de ayuda a domicilio no llega al 4% de la demanda; la teleasistencia a un 2% y sólo existe una plaza de centro de día por cada doscientos mayores. La solicitud de camas de medio y alto requerimiento aumenta cada día. Sólo en Canarias se necesitarían en estos momentos miles de ellas.

Si empezáramos a desmenuzar la situación los datos serían espeluznantes. En el caso del Alzheimer, por ejemplo, sólo el 1% de los 25.000 afectados recibe cobertura del Gobierno, tal y como denunciaba días atrás la presidenta de Alzheimer Canarias.

Urge la construcción inmediata de los dos centros sociosanitarios con carácter hospitalario que demandan el Norte y el Sur de Gran Canaria, y se hace absolutamente necesario que se pongan en marcha todos los mecanismos que permitan aplicar la Ley de Dependencia que lleva dos años de retraso en la negociación y en la firma de múltiples aspectos de los convenios entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Así, la semana pasada la Plataforma Ley de Dependencia Nuestros Derechos, compuesta por distintas asociaciones de dependientes, anunció que estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el Gobierno de Canarias ante el incumplimiento de los plazos para aplicar la Ley de Dependencia, donde se incluye un importante paquete de medidas para la atención de los mayores. Decididamente, no es país para viejos. Ni para dependientes

Antonio Morales Méndez.
Alcalde de Agüimes